

El Gobierno de  
la Nación?

73

Santiago Marzo 14/869.

A S. E. el Señor Ministro Secretario de Estado  
en el Departamento del Interior D. Dn. Palma  
rio Veloz Vassfield -

Se ha recibido por este Gobierno la nota que V. E. se  
ha servido dirigirme con fecha 10 de Febrero, manifestando que  
en contestacion a la circular de 12 de Noviembre del  
presente año por la cual el Gobierno dispuso que fueran  
valederos para el servicio nacional los certificados u otros  
procedimientos de los jueces de Paz de Provincia, en los mismos  
terminos y limites a que las leyes provinciales los autorizaban,  
el ministerio a cargo de V. E. ha recibido oficio de  
todos los Gobernadores de Provincia, a quienes cometi-  
ó el encargo de hacerlo saber a dichos jueces, alcaldes,  
como asimismo, dicha disposicion, excepto los Gobernadores  
de Entre Rios y Santiago del Estero, que ni han encontra-  
do conforme a las leyes provinciales dicha disposicion;  
y que instruido de este proceder el Señor Presidente,  
ha encargado a V. E. repita la orden transmitida, afin de  
que no quede subsistente el singular caso de una  
disposicion nacional vigente en doce Provincias y sin  
efecto en solo dos.

Al contestar la expresada nota, debo manifestar  
a V. E. que los sencillos vertidos en ella, lejos de es-  
clarecer, recaen mas bien los fundamentos en que  
se apoya el Supremo Gobierno de la Nacion para exigir de  
el de esta Provincia una medida cuya emision impor-

hacia para este un desconocimiento de todas sus debe-  
res y un olvido completo de todas las prescripciones de  
la ley.

La disposicion contenida en el inciso 6.º Artículo 16.  
de la Ley sobre jurisdiccion y competencia de los Tribuna-  
les Nacionales contiene una excepcion a la jurisdiccion  
atribuida a dichos tribunales por los articulos 1.º 2.º  
y 3.º de la misma ley, y que como tal no seria apli-  
cable sino a los casos expresicamente determinados  
en ella; mas en estos no se encuentra disposicion al-  
guna que convierta a los Jueces de Paz de Provincia en  
agentes del Gobierno Nacional, cuando como V.º lo ha  
acordado muy oportunamente, el no tiene otros que los  
Gobernadores de Provincia, y para bien cumplir la Cons-  
titucion y las Leyes del Congreso. -

Eximio, de que aqui no la excepcion puede ser  
aplicable. Esta se refiere a los lugares en que no haya  
establecidos Jueces de Seccion o que se haya distante  
la residencia de estos, y en los cuales los Jueces  
o colectores de rentas o individuos comisionados al efecto  
podrian demandar a los deudores del Fisco ante  
los Jueces de Provincia; pero en esta ni en carice de Ju-  
gado Nacional, ni hay rentas nacionales cuyo cobro pueda  
gestionarse ante los Jueces de Provincia.

Resulta pues que si la autorizacion a que se refiere  
en la nota de V.º de fecha 15 de Noviembre del pasado año,  
y que no podia ser sino una medida provisional concernien-  
te únicamente a determinadas Provincias, o como lo dice  
la que ahora contesto, la misma de que habla la Ley sobre  
jurisdiccion y competencia de los Tribunales Nacionales,

sea incógnita establecida, subordínalos ya anticipadamente en  
te por la ley, y si no era la misma mal persona el Gobier-  
no Nacional sufrir su establecimiento de él de esta Pro-  
vincia, cuando como lo he manifestado a V. en mi nota  
anterior, las atribuciones de los Jueces de Paz están deter-  
minadas por la ley, y no está en el arbitrio ni en las  
facultades del Gobierno ampliarlas o modificarlas.

Al oponer ante V. estas consideraciones, no es  
mi ánimo traer a juicio los actos del Gobierno Nacional,  
pues si tal hubiera sido mi objeto, habría examinado  
los fundamentos en que él se apoya para aplicar es-  
mo dice, las disposiciones de una ley para lo judicial  
o lo administrativo del servicio nacional, sino salvar una  
sencilla la responsabilidad de este Gobierno.

Las demás observaciones que contiene la nota de  
V. relativamente a supresión de Caballos y presentación  
de abortivos pertenecen demerito o no problema, como he  
dicho antes, sino la necesidad de una medida excepcional  
y transitoria, conveniente a ciertas y determinadas Provin-  
cias. Si el Gobierno Nacional, con el solo objeto de bene-  
ficar al pueblo de las Provincias facilitando las gesto-  
nes de sus demandos, quiere dar carácter nacional a  
los Jueces de Paz de Provincias, mañana sería necesario  
hacer lo mismo y con el mismo objeto con cualquier otro  
funcionario que autorizase un documento que debiese hacerse  
valor ante el Gobierno o los Tribunales de la Nación.

Por otra parte no niego los sucesos de Paz de Pro-  
vincias sometidos al Gobierno Nacional, para dar auten-  
ticidad a los certificados que ellos exhibieron se tempera-  
ra siempre en los inconvenientes que hoy encuentran V.

y trata de evitar, á menos que el nombramiento de aquellos se hiciera directamente por el Gobierno Nacional, de donde resultaría la intromisión del Gobierno General en el régimen interno de las Provincias.

Sería un error la sexta error que el Gobierno de Santiago quiere constituir en <sup>de</sup> la inobservancia, constituciónalidad de los actos del Gobierno Nacional, ó se abroga el derecho de objetarlos. De ello es responsable ante el Congreso, pero el Gobierno de esta Provincia se encuentra en el mismo caso ante la Representación de ella á la cual responde de todos sus actos y del cumplimiento de las leyes que la rigen y se norma.

El artículo 110 de la Constitución Nacional constituye á los Gobernadores de Provincias en agentes del Gobierno General para hacer cumplir la Constitución y las leyes del Congreso; pero no les impone ni puede imponerles la obligación de dar á los jueces de atribuciones que solo la ley puede conferirles y que esta la ha negado, solo por su cumplimiento á una simple orden del Gobierno Nacional, transmitida en una nota.

"Esta Constitución dice el artículo 31 de la misma, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dictan por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras, son la ley suprema de la Nación, y las autoridades de cada Provincia están obligadas á conformarse á ella, no obstante cualquier disposicion en contrario que contenga las leyes ó Constituciones Provinciales;" pero en él no se trata de simples medidas administrativas, y no habria quien, apoyado en esos artículos precedentes citados, pretenda que ellas

ni ninguno otro de la Constitucion impone a los Gobiernos de Provincias una sumision oiga y absoluta a todos los actos o disposiciones del Gobierno Nacional, aunque estos, sin basarse en la constitucion ni en ley alguna del congreso, se vayan a contrariar las leyes o Constituciones Provinciales.

Por ultimo, si en el proceder que observa este Gobierno, hay un notable contraste con lo que en contestacion a la circular de 12 de Noviembre ultimo han expuesto a V.E. los demás Gobiernos de Provincias, esto nada aumenta ni disminuye la fuerza de las razones aducidas por V.E. o por este Gobierno con motivo de este incidente.

Puede tambien ser el tachado de irregular, solo por que no este conforme con el que han observado otros Gobiernos de Provincias que quizá no se encuentran en el mismo caso que este?

Tambien recuerda que en 1863 el Gobierno de San Juan desconfiando a la sazón por el actual Sr. Presidente de la Republica, sostuvo solo su derecho a declarar el estado de sitio contra la opinion de todos los miembros del gabinete Nacional, de todos los Gobiernos de Provincias, sin que a nadie le ocurriera censuras de aquel por el mismo hecho de ser de opinion que sustentaba tales doctrinas.

Al terminar esta nota, repito a V.E. lo que

manifeste en mi anterior que despo de vivamen-  
to no poder acceder a los deseos del Sr. Presidente,  
puesto que no está en mis atribuciones dar a los  
empleados de esta Provincia otras funciones ó facul-  
tades que las señaladas por las leyes que los crearon,  
pero salvado este inconveniente, como es fácil ha-  
cerlo recurriendo del Congreso la sanción de una  
ley que reuniria a dentro la renta de otros jueces  
prolegatorios en toda la Republica me apresuro a  
dixar que ella sea inmediatamente cumplida en  
esta Provincia.

Con este motivo me es grato reno-  
var a V. O. las seguridades de mi mas distin-  
guida consideracion.

Dios que a V. O.

Manuel Taboada.

Alexandro S. Monte.